

Jungla globalizada, selva para la resistencia. La tensión entre lo global y lo local en una periferia en guerra

William Fernando Torres

William Fernando Torres: Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Surcolombiana, Neiva.

Este artículo retrata el clima de guerra que se vive en la región surcolombiana, vecina de la Zona de Distensión, donde se adelantan las tortuosas negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno desde 1999. Se describe la perversión de los lenguajes y las representaciones de las fuerzas en conflicto y, asimismo, las manipulaciones y desfases de los relatos mediáticos y académicos. Se reseñan brevemente las narraciones y análisis de los conflictos colombianos para establecer una de sus causas más citadas y, con esa base, proponer una relación de las etapas y dinámicas de las guerras actuales hasta llegar al momento en que la globalización interviene en ellas. Concluye describiendo sus características, sus impactos en la región surcolombiana y proponiendo tareas para resistirlos.

El D-8 deja atrás el desierto de la tatacoa , el verde plástico de los cultivos industriales de arroz de Huila y la represa de Bitania , mientras los pasajeros soñamos con ver los exuberantes verdes de la selva amazónica. Pero de pronto los motores dan un bramido de animal presto a atacar y nos descubrimos navegando entre una niebla muy densa. Poco después, nos sentimos a la deriva en el corazón de espesas nubes oscuras. En la penumbra, los pasajeros detienen sus conversaciones para caer en un intranquilo silencio. «Estamos sobre el cerro de Gabinete», susurra la rubia desconocida del lado atenazándome el antebrazo con una mano sudorosa. Un relámpago frío me atraviesa el estómago porque recuerdo viejas crónicas que le han dado a esta montaña, en la Cordillera Oriental colombiana, la mala fama de cementerio de aviones.

Como esforzándose por apaciguar nuestra aprensión, el Dash Havilland da saltos bruscos hacia adelante y, largos minutos más tarde, gira de súbito a su izquierda. Luego, por fin, sale del nebuloso laberinto. En ese momento respiramos tranquilos: ante nosotros aparece la reconfortante luminosidad de un atardecer pleno de verdes de selva talada, de esos ojos de agua rodeados por palmeras que llaman cananguchales, de ríos caudalosos y vacunos acostumbrados al paso de máquinas voladoras. La rutinaria voz almibarada de la azafata nos despierta de esta contemplación para deseamos una grata estadía en Florencia, capital del departamento de Caquetá, entrada a la Amazonia colombiana.

Un momento después, la aeromoza insiste en agradeceremos que hayamos elegido su línea -en medio de tanta competencia- y nos ofrece de nuevo sus servicios. Pero, a pesar de tamaña amabilidad, una vez se abre la portezuela nos atropella una ola de calor húmedo y, sobre todo, la presencia de militares. Los soldados suplen con gestos autoritarios la falta de adustez en sus rostros imberbes y ocultan su falta de veteranía eludiendo miramos a los ojos. Sin embargo, no necesitan asustarnos mucho porque de antemano todos tenemos el miedo hormigueándonos en el cuerpo, pues en el anterior aeropuerto, el de Neiva, tuvimos que soportar todos los cacheos posibles. Al entrar, fue imperativo someter el equipaje al análisis de un aparato de rayos x y pasar uno mismo el examen de una máquina detectora de metales; luego, al llegar a la barra, encontramos un aviso bien visible que recordaba la obligación de entregar las armas al registramos; después, antes de caminar hacia el avión, debimos dejamos palpar bajo las axilas, la cintura y la parte baja de las piernas por un agente policial quizás en busca de sofisticados armamentos; enseguida, fue preciso pasar los maletines de mano por otro aparato de rayos x, demostrar a un guardia que el nombre anotado en el billete de vuelo coincidía con el de nuestro documento de identidad y, ya en la pista, policías de civil nos exigieron señalar cuál era nuestra valija, entre las alineadas frente a los viajeros, para que la subieran al compartimiento de carga. Para colmo, naufragábamos bajo la soleada tortura de 42 grados centígrados.

«¿Por qué nos tocan el cuerpo?», preguntó en esos momentos un niño ofuscado, pero nadie estaba para respuestas. No obstante, un silencio después, un hombre recio -con facha de ganadero y sin dirigirse a nadie- recordó con irónica hosquedad que esas revisiones resultaban inútiles porque meses atrás un guerrillero preso, cuando era trasladado de cárcel, secuestró aquí un aparato para llegar hasta San Vicente del Caguán. Instantes más tarde, un compañero de viaje -también sin dirigirse a nadie- se atrevió a refrescar que hacía unos días otro guerrillero de las FARC asaltó un avión en sentido contrario, para huir de San Vicente.

Ellos se referían al principal municipio de la vecina Zona de Distensión o Zona del Despeje. Un territorio de 42.000Km² -parte selva amazónica, parte Cordillera Oriental-, que las FARC exigieron al gobierno de Pastrana como condición para iniciar las negociaciones de paz en enero de 1999. No hay policías ni militares, pero allí está el sitio de Los Pozos, donde se realizan audiencias públicas con el fin de proponer alternativas a los problemas nacionales, a las que asisten ciudadanos procedentes de muy diversos lugares del país. La situación no está entonces como para andar contemplando paisajes. Con todo, los pasajeros del Dash Havilland más que molestos intentan parecer despreocupados. Este es un grupo en el que se mezclan políticos, altos funcionarios locales, ganaderos y comerciantes que conversan entre sí en voz alta y ríen con las mandíbulas tensas; pero también hay en él escoltas, monjas ancianas, aturdidos niños con demasiadas preguntas en los ojos, agentes vendedores, mestizos de tristeza antigua, miembros de ONGs disfrazados de científicos sociales, un fornido muchacho con una pierna y una mano enyesadas por exceso de velocidad en moto, y tres falsas rubias perfumadas que portan joyas deslumbrantes, llevan bolsas de prestigiosos almacenes, pero sus excesivos amañamientos más bien revelan el pasado pleno de carencias que pretenden encubrir. Además, ellas ya no vienen en bandadas parlanchinas como antes de iniciarse las negociaciones para la paz.

Ai llegar a pie al terminal de una sola planta, los pasajeros rivalizan por su equipaje, las rubias lucen sus oscuras gafas de divas y se mordisquean los labios con fingida desesperación mientras agitan las manos buscando maleteros; entre tanto, otros pactamos compartir un taxi para recorrer los siete kilómetros a la ciudad. Al pasar frente al restaurante descubrimos a congresistas, funcionarios de la Consejería de Paz y reporteros de medios nacionales entregados a la fatigante tarea de buscar nuevos temas de conversación en medio del bochorno. En el taxi, alguien elogia la serena belleza de esta tierra «tan diferente a los peladeros del Huila» y en la que hay ganados bien cebados y se puede producir mucha riqueza, *pero ...* Y la conversación cae en un silencio pantanoso que parece elegido de común acuerdo para no referimos a la policía y al ejército, a la guerrilla, a los paramilitares, a los ubicuos hombres del narcotráfico, en una palabra, a la guerra.

Lenguajes perversos

Tanto dirigirse a nadie en especial, tantas medias palabras, tantos silencios que parecen acordados, sugieren la complejidad y polarización de esta guerra. En ella nadie parece saber qué pasa porque los lenguajes de los contendientes terminan confundiendo todo: para empezar solo hasta hace pocos meses las instancias oficia-

les aceptaron que estábamos de verdad en guerra, aunque sin precisar su carácter, tal como se hizo años atrás cuando se habló de «guerra contra el narcotráfico», durante el gobierno de Barco (1986-1990), o «guerra integral» durante el de Gaviria (1990-1994). A su vez, las FARC llaman «retenciones» a los secuestros e «impuestos» a las extorsiones, y los paramilitares no aceptan que ellos cometan masacres sino tan solo «selecciones múltiples de objetivos militares». Por su parte, columnistas de la gran prensa y revistas distinguidas reciclan el epíteto de «mamerto» con el que antaño la izquierda antiparlamentaria descalificaba a los comunistas, para endilgárselo a quienes hoy insisten con fe de carbonero en construir sociedades socialistas y oponerse al imperialismo. Mientras tanto, algunos académicos se irritan porque pares suyos califican a los guerrilleros de «insurgentes» y, a su lado, otros más debaten si aún no hemos entrado en un periodo de «guerra civil» o vivimos una «guerra contra la sociedad»; sin embargo, pese a estos esfuerzos por precisar matices, son pocos los ciudadanos que se escandalizan porque cualquiera de los grupos en pugna minimice las ejecuciones que realiza diciendo que ha «dado de baja» o ha procedido a «ajusticiar» a alguien. Por último, altos mandos del ejército y la policía acusan de «bandoleros» o «narcoguerrilleros apátridas» a los alzados en armas y, en ocasiones, algún oficial lanza misiles verbales porque siente que han entregado parte del territorio patrio o que tiene las manos atadas para perseguir a los bandidos; no sobra señalar que estas cóleras a veces olímpicas reciben inmediatas aclamaciones en grafitos callejeros: «General Mora / Acabemos con la gerrilla (sic) / Porque la paz se demora», reza uno en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá.

Por supuesto que estas denominaciones no son mera cuestión de disputa semántica: responden obviamente a la manera como cada bando se representa el conflicto. Además, crean una jerga confusa que los medios masivos de comunicación asumen sin beneficio de inventario porque tan solo parecen interesados en presentar la guerra como una película de suspenso que les garantice alcanzar altas sintonías. Sin ir muy lejos, sé de un corresponsal que le pidió a una mujer, arruinada por una toma guerrillera, que llorara ante la cámara con el argumento de que así conseguiría un auxilio del Gobierno, y cuando le preguntaron por la ética de su actitud, respondió con desparpajo: «Esque estas son las notas que me compra el noticiero». Añádase a esta Babel que los múltiples intereses que interactúan en la cotidianidad colombiana han ido ampliando el lenguaje coloquial al darle nuevos sentidos a expresiones -como «mula» o «desechable»- o al describir nuevos actores e inéditas situaciones sociales con términos -como «raspachín», «traqueto», «marimbero» o «paraco»- que no ocultan fuertes tintes de repulsa o desdén.

Así las cosas, resulta difícil construir un lenguaje y unos relatos que no estén cargados de palabras minadas para analizar la contienda. Pero, sobre todo, es casi imposible abrir el espacio para que se escuchen otras reflexiones: las de quienes quedan en medio de los ejércitos, las de quienes pierden familiares y propiedades, la de los casi dos millones de colombianos que en los últimos 15 años se han visto condenados al desplazamiento y, para mayor desgracia, son invisibles porque no existen en los censos y las narrativas oficiales. A estos invisibles solo se los enfoca cuando rinden testimonios patéticos sobre su tragedia. Como es previsible, tales dramas contribuyen a elevar los índices de sintonía de emisoras radiales y televisivas y, por consiguiente, a encarecer las tarifas para la publicidad. Pero, sobre todo, estos testimonios sirven para el cinismo: con demasiada frecuencia grupos en liza -a quienes al parecer ya nada les importan estas gentes- los usan para probar y reprobar la inhumanidad de sus enemigos.

Postal sobre las actuales guerras colombianas y sus lianas con la jungla globalizada

De manera evidente, los anteriores lenguajes con sus inevitables pesos ideológicos y lucrativas manipulaciones, han marcado los relatos y análisis escritos sobre la guerra en Colombia. Los primeros recuerdan, por ejemplo, las múltiples y encarnizadas guerras del siglo XIX para decidir si el país devenía federal o centralista; asimismo, se acercan a la infancia traumática de los violentos para sugerir alguna de las motivaciones del conflicto; otros suponen que con la violencia bipartidista de los años 50 emergió una «cultura de la muerte» expresada en la refinada sevicia con que se eliminaron enemigos; algunos más aseguran que las oleadas de campesinos desterradas a las ciudades chocaron con deslumbradores consumos y opuestas visiones de mundo que confundieron y relativizaron sus valores; otros añaden que estas circunstancias llevarían a sus hijos -carentes de padres y exaltados venedores de sus madres- a convertirse en sicarios de aquellos que se encomiendan a vírgenes católicas para que «les salgan derechos sus trabajos» y que, por lo general, mueren antes de cumplir 20 años. Por otra parte recientes testimonios, biografías, autobiografías, crónicas y entrevistas dan cuenta de la trayectoria de comandantes insurgentes o del autoexamen vital de líderes guerrilleros; del ascenso y caída de grandes capos del narcotráfico, de la desesperación que azuza a muchos a ilusionarse como pequeños transportadores de droga -«mulas»- para terminar en cárceles extranjeras, o de las penalidades de los recolectores de hoja de coca llamados «raspachines». También exponen la trivialización que ex-presidentes hacen de la

historia nacional al reducirla a anécdotas en las que, como era de esperar, salen bien librados¹

Mientras tanto, especulaciones paralelas a los anteriores relatos pretenden establecer una predisposición genética de los colombianos para la violencia. Frente a ellas, los estudios se empeñan en profundizar sobre los orígenes, procesos, internacionalización y degradación del conflicto. Sin entrar en sus detallados matices, muchos de estos trabajos permiten inferir que una, *entre otras*, de las causas centrales de la constante zozobra en el país ha sido la excesiva concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Ello ha supuesto que, para evitar mayores conflagraciones, cada cierto tiempo se impulsen reformas con el ánimo de democratizar la primera o ampliar los espacios políticos del segundo. Hasta el presente las reformas no lograron cumplir su cometido de manera cabal pues las instituciones encargadas de ejecutarlas, como en el caso de la agraria, compraron tierras de desecho a los ricos para enriquecerlos aún más y así mantuvieron la enorme desigualdad social que se pretendía reducir y, por tanto, empujaron a los campesinos a radicalizarse o a sembrar cultivos rentables así estuvieran prohibidos. A su vez, las luchas por la apertura política terminaron casi siempre con la eliminación física de sus militantes y el arrasamiento de sus organizaciones, como sucedió pocos años atrás con la Unión Patriótica y candidatos izquierdistas o moderados a la presidencia de la República, como está sucediendo hoy con defensores de derechos humanos y periodistas.

En consecuencia, esta empecinada cerrazón de las elites dio pie para que surgieran diversas guerrillas y, *en parte*, los narcotraficantes, pues las primeras, con gran participación campesina, vislumbraron que alzarse en armas les permitiría dejar atrás largos años de injusticias, humillación y precariedades. Asu vez, procedentes de las clases medias bajas urbanas e instruidos en escuelas públicas que los instaron a labrarse un camino propio para alcanzar el éxito, los segundos advirtieron que ellos también podrían disfrutar grandes riquezas como lo hacían los poderosos si -a falta de relaciones para alcanzarlas por caminos legales- capitalizaban la existencia de una demanda creciente de psicoactivos en el mercado internacional, y si, para distribuirlos, aprendían la experiencia acumulada por viejos contrabandistas

¹De paso, anotemos que en Colombia estos son los géneros que más produce la industria editorial. Ello puede revelar, por un lado, el ansia de aprobación social o de «ajuste de cuentas» que persigue a algunos protagonistas de esos textos y, por otro, el morbo de los consumidores o la necesidad de algunos lectores de recoger información de primera mano para hacerse una idea particular sobre la «historia oculta» o las dinámicas actuales. Con todo, algunos suponemos que estos esfuerzos de la industria editorial no cumplen un mero fin informativo, pues al convertir la guerra en un rosario de anécdotas, la presentan fuera de contexto y la tornan trivial; así, contribuyen a que se viva de manera pasional y polarizada y, por tanto, a que no haya espacio para que los análisis formen opinión pública y posibiliten fijar una agenda ciudadana.

y nuevos exportadores de marihuana -«marimberos»- que volvieron más eficaces las singladuras abiertas por los piratas del Caribe tiempo atrás, pero, aparte de lo anterior, descubrieron que podrían conseguir las ganancias sin límites que facilitaba el hecho de que las drogas estuvieran prohibidas, si se inventaban rutas por mar y aire apoyadas con alta tecnología y capacidad de corrupción.

Así las cosas, la guerrilla recurrió durante décadas a la vía militar y, luego, cuando algunas se convencieron de que sus esfuerzos podrían ser más útiles en la política pública, negociaron reformas políticas, entregaron las armas y se reinsertaron en la sociedad civil, pero muchos de sus líderes fueron asesinados igual que ocurrió en los años 50 con Guadalupe Salceda, el jefe guerrillero liberal que aceptó trasladarse a Bogotá. Por su lado, los traficantes de cocaína fueron muy hábiles y agresivos para usar la seducción, el soborno o el chantaje; cuando estos caminos se les cerraron porque los políticos e industriales beneficiados con sus donaciones o negocios les dieron la espalda, unos echaron mano del terrorismo más salvaje del que eran capaces -dada la compulsión por vengar los desaires recibidos a su afán de reconocimiento social para lo que contaron con servidores tanto dentro de las instituciones como en las barriadas marginales. Como resultado de este proceso unas guerrillas -M-19, EPL y Quintín Lame- lograron que el gobierno de César Gaviria convocara una Constituyente en 1991 y, por su vera, los narcotraficantes consiguieron que flexibilizara la legislación frente al tráfico de estupefacientes.

Con todo, estas concesiones no fueron suficientes para desmovilizar a las antiguas FARC y el ELN. Para neutralizarlas, diversos gobiernos facilitaron armarse a los civiles hasta el punto que hoy se da por hecho que circulan más armas entre la población civil y las compañías de vigilancia privada que en las fuerzas del Estado. Al mismo tiempo, los funcionarios encargados miraron para el techo cuando traficantes de coca y esmeraldas conformaron grupos para militares con el propósito de perseguir las guerrillas y, a la vez, barrer a quienes les secuestraron padres o hermanos o atentaron contra las extensas fincas compradas para lavar sus dólares y consolidar territorios estratégicos que llegaron a sumar más de 40% de las tierras fértiles del país². De igual manera, los funcionarios encargados miraron para el piso cuando estos paramilitares pactaron alianzas con miembros del ejército y la policía con el ánimo de realizar operaciones psicológicas o aniquilar enemigos ideológicos, como lo demuestra el cierre de la Brigada XX por presión norteamericana,

²Sirva recordar aquí (que con ello no solo realizaron una contrarreforma agraria, despilfarrada en ganadería extensiva, sino que estropearon la propuesta mecanicista del consejero económico de Pastrana padre (1970-1974), Lauchin Currie, de dedicar esas tierras a la agroindustria y trasladar sus campesinos a las ciudades con el fin de tener mano de obra barata para la construcción.

o el que muchos oficiales expulsados de sus carreras optaran por integrarse a las filas de esos ejércitos derechistas.

Esta generalización de la guerra llevó al agravamiento de la misma y, posteriormente, a su degradación. Entonces los bandos en disputa pasaron muchas veces por encima de los principios que proclamaban o usaron armas que afectaron a la población civil, como potentes explosivos o pipetas de gas convertidas en morteros -no se olvide que Pablo Escobar sostenía que «la dinamita es la bomba atómica de los pobres». En consecuencia, los extremos políticos acabaron entendiéndose y se dieron alianzas inesperadas o enfrentamientos de todos contra todos. El M-19 tuvo instantes de aproximación con Pablo Escobar; las FARC se aliaron durante meses con el ELN para concluir combatiendo entre ellos mismos por territorios; antiguos cómplices de Pablo Escobar fundaron los Pepes -Perseguidos por Pablo Escobar- con el propósito de contribuir a su caída y consolidaron las bases militares para el surgimiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; los miembros del Cartel de Cali apoyaron al Gobierno en su persecución al jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar; el EPL se enfrentó a los para militares, luego batalló contra las FARC y, más tarde, unos cuantos de sus militantes se pasaron a las AUC que ahora intentan acorralar al ELN; las FARC han aumentado sus ingresos cuidando cultivos de coca y amapola y laboratorios para procesar los psicoactivos y, a la vez, cobran un impuesto por cada kilo que se exporta, y aunque fuentes gubernamentales los acusan de haber entrado de lleno en el negocio, algunos autores cuestionan esa inculpación porque aseguran que las FARC no poseen tantos hombres como para distraerlos de las tareas de la guerra. Para buscar salidas a ese escalamiento, el gobierno actual y las FARC se comprometieron en el proceso de paz ya citado. En él, según organizaciones internacionales, se desdeña el derecho internacional humanitario, mientras otros sostienen que sus logros son las audiencias públicas o el seguimiento externo al mismo. A su vez, el ELN y el Gobierno negocian una Zona de Encuentro para dialogar, pero los habitantes del territorio elegido se oponen a su creación presionados por las AUC.

Las anotaciones precedentes permiten inferir que las elites pusieron siempre los gobiernos a su servicio impidiendo que se constituyera un Estado capaz de ser mediador o árbitro imparcial en las disputas de sus ciudadanos. Esta carencia de legitimidad -demostrada por la frecuente ausencia ciudadana de las urnas- hizo posible que campeara la corrupción hasta el punto que el país ocupó deshonrosos puestos en las estadísticas mundiales sobre el tema, se redujo la capacidad de asombro e indignación de los colombianos y, para mayor inri, muchos creyeron que podría resultar hasta un mérito social alzarse con los dineros públicos sin dejar

huellas de su latrocinio, de ahí que muchos funcionarios elegidos o nombrados celebren su llegada al poder diciendo a sus huéspedes: «Ahora, amigos, nos llegó el cuarto de hora».

Esta esquemática narración lleva a concluir que en Colombia se han dado varias guerras paralelas durante el último medio siglo. Una contra el gobierno establecido, liderada en su mayoría por campesinos alzados en armas. Otra, la de unos habitantes urbanos que acumularon riquezas basadas en un comercio ilícito y se constituyeron en carteles para rentabilizar más su negocio y tener mayor capacidad para enfrentarse -o corromper- a los últimos gobiernos colombianos y, también, al gobierno de Estados Unidos y sus sectores más conservadores; en ella, algunos de sus miembros compraron protección a la guerrilla hegemónica en el sur amazónico del país mientras otros organizaron ejércitos para perseguirla. Algunos analistas -como Daniel Pécaut- afirman que las esperanzas colectivas o ambiciones particulares que enarbolaron estos grupos se olvidaron en la medida en que el conflicto se tornó más violento para terminar dando primacía solo a la dimensión militar. Como es suficientemente conocido, estas explosivas circunstancias resultaron contrapuestas a los intereses norteamericanos en América Latina, entre ellos, sobre todo, mantener el control social con el fin de consolidar un mercado seguro para sus productos de consumo -piénsese en el ALCA 2005-, garantizar la productividad de sus transnacionales -en especial, petroleras, químicas, farmacéuticas y de armamento- y apropiarse de una de las biodiversidades más ricas y estratégicas del planeta: la de la región amazónica.

La concreción más clara de estos intereses es el Plan Colombia. Esta estrategia pre-texta atacar el narcotráfico y reducir las fuentes de financiación de la guerrilla -en especial, a la establecida en la Zona de Despeje, pero, en el fondo, lo que se evidencia es su propósito de debilitar la insurgencia por la vía militar para imponerle las condiciones de negociación, detener a los movimientos sociales que propenden por la paz negociada e, igualmente, desterrar a los habitantes de la Amazonia colombiana mediante una fumigación masiva de los cultivos de coca y amapola que contamina el medio ambiente, envenena las aguas e intoxica a los pobladores. Con todo, estas últimas circunstancias suscitan una pregunta inquietante: si EEUU quiere apoderarse de la biodiversidad amazónica, ¿por qué la fumiga?; ¿será para desplazar a sus pobladores? De paso, el Plan Colombia también aspira a neutralizar a gobiernos y movimientos sociales que cuestionan sus intereses en el área y, además, a servir para que EEUU se deshaga de armamento obsoleto. En el primer caso, ello está claro en el empeño de modernizar bases militares en el Caribe, Ecuador y Perú para controlar militarmente la zona; en la actitud estadounidense contra

el gobierno de Hugo Chávez, los indígenas ecuatorianos, los Sin Tierra brasileños, los ambientalistas, los proyectos exitosos de desarrollo colectivo como el presupuesto participativo de Puerto Alegre; en la amenaza al gobierno de Andrés Pastrana de que si acciones populares o jurídicas detienen la fumigación en los departamentos del sur del país podría detenerse el apoyo al Plan, pero, sobre todo, el que de los 1.600 millones de dólares aprobados para el proyecto tan solo 80 millones se dirijan a un supuesto desarrollo social. Del segundo propósito da cuenta la obligación impuesta a Colombia de comprarle equipos bélicos anacrónicos con la mayor parte del dinero que le prestan.

Este instrumento, en suma, no es más que la expresión militar de la globalización en una selva periférica de alta diversidad biológica en cuyo territorio, vaya paradoja, se producen psicoactivos directamente para EEUU. Para ese país que -según Antonio Caballero- gracias a su preponderancia cultural impuso en el mundo entero el consumo de drogas y, a continuación, gracias a su poderío, impuso la prohibición de las mismas, " <única característica que las convierte en el mejor negocio del mundo>".

La globalización en la periferia

El taxi nos deja en el parque central de Florencia. Los compañeros de viaje nos despedimos sin confiarnos los nombres. Al contemplar el sitio descubrimos un edificio estatal de falsos arcos coloniales -pues la ciudad apenas va a cumplir 100 años-; a sus alrededores bostezan improvisados comercios de cacharrerías, restaurantes de comida rápida y un viejo cajero automático. El parque no tiene muchos árboles e iconos que evoquen la selva cercana o el pasado. Frente a una de sus orillas, un alto edificio de arquitectura autoritaria rinde memoria a uno de los patriarcas políticos de la localidad, cuyos descendientes han sido asesinados en los últimos años; en sus vitrinas, maniqués vestidos con caras ropas de marca miran con indiferencia a las familias campesinas, los vendedores de lotería y los niños indigentes drogados con pegante -o «desechables»- que van a la deriva por la acera. En las calles circulan ostentosas camionetas 4x4 de colores vivos y vidrios polarizados que a veces dejan oír rancheras o vallenatos en altos decibeles; también pasan veloces motos, muchas de ellas manejadas por mujeres. Esta rápida mirada da la sensación de que la ciudad ha sido construida como un mero sitio de tránsito hacia la selva o de ella al centro del país, pues no se ven esas bellas casas que levantan las familias para enfrentar el tiempo y morir en ellas.

Florencia ha sido obra de misioneros y producto de guerras. Los primeros, de origen italiano, vinieron a evangelizar a coreguajes y huitotos desde principios del pasado siglo. Las guerras se dieron entre los colonos fundadores que tomaron grandes extensiones con el fin de extraer quina para las farmacéuticas y caucho para la producción industrial de llantas, pero sobre el sudor y la sangre de los indígenas -como lo expuso José Eustasio Rivera en una carta a Henry Ford en 1928. Años después, a principios de la década de los 30, la guerra con el Perú le dejó un primitivo sistema de comunicaciones y carretera a Neiva; en los años 50, llegaron familias huyendo de la cruel guerra entre liberales y conservadores y, además, gentes que querían esconderse o simplemente borrar su pasado y empezar una vida nueva; en los 60, se dio uno de los primeros secuestros en Colombia, en una enorme y tecnolozada hacienda ganadera cercana; en los 80, la ciudad fue invadida por el M-19 que actuaba en los alrededores; y, durante las semanas de guerra entre Argentina y Gran Bretaña, campesinos desplazados tomaron una de sus lomas y conformaron el asentamiento más grande del continente: Las Malvinas. Desde entonces, el municipio vivió una guerra sucia contra militantes de izquierda y, en septiembre de 1996, los raspachines asediaron la sede de gobierno durante más de un mes y, luego, la tomaron: pedían condonación de las deudas para los campesinos pobres, erradicación manual de los cultivos llamados ilícitos, subsidio para sembrar cultivos alternativos y mercadeo asegurado de los mismos. Después de firmar la negociación muchos de sus líderes aparecieron muertos. Ahora allí circulan las fuerzas del Estado, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Cerca de la mitad de los hogares están suscritos a la televisión por cable, hay poco más de 1.500 personas con cuenta en internet y algunas de ellas venden vía virtual GPS -*Global Positions Systems*- computadores y teléfonos celulares usados de última generación. Los raspachines, por su vera, insisten en pedir lo mismo que cinco años atrás; cada día llegan más desplazados por el conflicto en el Putumayo y en el Bajo Caquetá. Fuentes confiables indican que la población alcanza hoy 127.000 habitantes. A ellos habría que restarle, entre otros, los cuatro periodistas asesinados durante el último semestre.

Florencia y el Caquetá hacen parte del Proyecto Región Surcolombiana. Esta es una iniciativa que impulsan, por un lado, gobernadores de seis departamentos constituidos como la Alianza del Sur y, por otro, académicos y organizaciones ambientales y en la que hay claras diferencias en la concepción del territorio. Sin embargo, ambos grupos coinciden en obtener mayor peso político ante el Estado, exigir mejores condiciones económicas para la zona, evitar la fumigación de los llamados cultivos ilícitos y propender por erradicar los mismos de manera manual. No obstante, el proyecto ha tenido fuertes contradictores entre funcionarios políticos y

académicos que defienden el modelo centralista para el país -como se recordó arriba que ya había ocurrido en el siglo XIX-, a pesar de que el mismo es la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial contemplado por la Constitución de 1991. La región vive con escasos presupuestos estatales y su economía tradicional ha perdido viabilidad ante la presencia de la guerra y el peso del narcotráfico. Estas circunstancias, a su vez, han acelerado la destrucción del medio ambiente e impedido la investigación nacional de la rica biodiversidad en el área. Por otra parte, el manejo de la política está en manos del clientelismo que se sostiene en el poder gracias a la corrupción que patrocina y, entretanto, este clima de zozobra ha fracturado la cohesión social debido al silencio de la gente, la ruptura de los tejidos comunicativos cotidianos y el desplazamiento. Hoy en los centros urbanos habitan sobre todo migrantes recientes, desplazados y jóvenes sin empleo.

De esta cruda quiebra dan cuenta las reducidas opciones de futuro con que cuentan los jóvenes y que son apenas las de convertirse en miembro de alguno de los bandos en liza, narcotraficante, instrumento del clientelismo o pandillero. Estas circunstancias, más la frágil formación afectiva y, en ocasiones, la frustración resultante de no poder asumir las vidas protagónicas, libres y confortables que proponen los filmes y programas televisivos hollywoodenses, parecen motivar la elevada tasa de asesinatos y suicidios de jóvenes que, desde hace un quinquenio, supera los promedios internacionales. A ello se añade la conversión de muchachas casi niñas en objeto sexual de narcotraficantes ostentosos y agresivos, calificados como «traquetos», cuando tan solo una generación atrás muchas de sus madres se reclamaban como «el hombro de los colonos». También se pueden sumar a estas pruebas del deterioro social los imaginarios de futuro de los niños escolarizados -quienes se ven de mayores como guerrilleros, militares, choferes, futbolistas, cantantes, profesores o médicos-, y que son evidente consecuencia de la tensión diaria, los modelos que propone la televisión o la admiración por los adultos con quienes pueden tener un trato más tranquilo. Estos naufragios a menudo conducen al desgarramiento de las identidades que -como lo ha visto Alain Touraine- para aplacar su constante sensación de vacío, su falta de norte o sus atormentadas interrogaciones sobre la propia identidad, se refugian bien en el consumismo compulsivo (que en este caso es incitado por hipermercados de cadena surgidos después de propiciar el traslado de las galerías y plazas populares de mercado a las afueras de las ciudades), o bien en los múltiples grupos religiosos que han aparecido en la última década -entre los cuales uno amenaza ahora con suicidio colectivo si procesan judicialmente a su orientador.

Al releer los apuntes precedentes podemos concluir que la jungla globalizada tiene en su red a la región surcolombiana. Y ello no solo gracias a la política de hacemos avergonzar de nuestras culturas locales y periféricas, sino también al individualizamos, atomizamos y uniformamos mediante las seductoras estrategias de las culturas del espectáculo y el consumo de mercancías esteticizadas, erotizadas y seriales, entre las que se encuentra la información y esas nuevas tecnologías que, si bien nos hacen sentir modernizados, nos infunden lógicas egoístamente calculadoras y rígidamente deductivas. Asimismo, la jungla globalizada está presente al querer apropiarse de materiales de la selva tropical y saberes indígenas -como aconteció con el yagé- y arrastramos para ello a una *guerra social de la globalización*, según la nomina Jaime Caicedo, que destruye la producción de alimentos y la riqueza acumulada con el trabajo de numerosas generaciones.

Frente a esta andanada, planes de desarrollo departamentales aprueban la competitividad pero con sostenibilidad y corresponsabilidad ciudadana. Los gremios invitan a crear una región emprendedora, justa, competitiva y pionera en el manejo de la biodiversidad. Las cámaras de comercio incitan a los «surcolombianos a comprar surcolombiano». Creadores e intelectuales proponen, entre otras cosas, luchar por construir un Estado-nación legítimo, rechazar las acciones militares y de agresión al medio ambiente proyectadas en el Plan Colombia, solicitarle a la Comunidad Económica Europea aceptar una moratoria de la deuda externa colombiana y otorgar aranceles preferenciales para los alimentos que producen colonos y campesinos sin utilización de químicos; asimismo, plantean romper el autismo narciso generado por las fronteras departamentales -que responden a intereses clientelistas- con el propósito de mirarse a la cara y reconocerse como colombianos, generar iniciativas populares que exijan la aprobación de una reforma agraria equitativa y sostenible y de una Ley de Ordenamiento Territorial en la que se asuman las regiones con base en la historia y las culturas que hayan construido y, a la vez, se comprometen a edificar la región a partir de una democracia local que garantice a los ciudadanos un contacto continuo con sus dirigentes y la fiscalización de sus acciones e integre los saberes acumulados por universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. De la misma manera, comuneros urbanos solicitan empleo, detener la inseguridad y el alza de precios exagerada de los servicios públicos privatizados, así como la ampliación de la cobertura y calidad de la salud y la educación. Los campesinos siguen pidiendo tierra para cultivar, la condonación de deudas, créditos blandos, apoyo al mercadeo mediante el cierre de importaciones y, en particular, detener las fumigaciones con glifosato.

Sin embargo, unas propuestas son contradictorias en sí mismas, como las de los planes de desarrollo, que en ciertos casos no han consultado a los habitantes y mantienen conceptos discutibles como los de progreso y desarrollo. Otras, de largo plazo, resultan carentes de tareas concretas en la actualidad, y otras más parecen lemas ineficaces. Las de los intelectuales requieren mayor divulgación y movilización para que sean tenidas en cuenta y las de los comuneros y campesinos han sido expuestas mediante una de las maneras que más se consigue ser escuchado en Colombia: haciendo paros, atravesándose en las autopistas. Empero, con base en todas las propuestas mencionadas se puede ir edificando ese *gran proyecto colectivo* de nación del que habla Jameson y que fue enunciado por el viejo Henri Lefebvre. Para alcanzado es imperioso autorreconocernos culturalmente, descubrimos y crear espacios de encuentro en donde reconstruyamos nuestras memorias culturales y establezcamos cómo nuestros ancestros consolidaron una sociedad -si bien clasista pero cohesionada y multicultural- en unos territorios que medio siglo atrás estaban aislados del país y en los que ahora estamos reducidos a la anomia.

A partir de allí podremos construir nuevos tejidos comunicativos y cohesión social como lo están haciendo algunos comunicadores comunitarios- que nos permitan formar a niños y jóvenes con autoestima, autonomía y solidaridad -entendida ésta también como capacidad para crear equipo y negociar. Es decir, no producir exaltados chovinistas ni veneradores acrílicos de lo ajeno sino gentes capaces de descubrir las seducciones de los lenguajes deslumbradores y engañosos y las anestias que ellos producen; seres capaces de asumir la lucha discursiva. También requerimos con urgencia formar científicos que puedan explorar la biodiversidad y nuestros ecosistemas estratégicos con el fin de defender estas riquezas para el bien de la especie humana y no de particulares intereses.

Estas son las cuestiones que discutimos en un pequeño restaurante de comida criolla con varios maestros. Cuentan que tenemos esperanzas porque muchas noches atrás, mientras se oían tableteos de ametralladoras y zumbidos de helicópteros en las afueras, dos de ellos descubrieron en las calles en penumbra de la ciudad vacía a una muchacha y un muchacho que paseaban tomados de la mano. Uno de ellos, al reconocerlos como alumnos suyos, quiso apremiarlos a refugiarse en sus casas, pero el otro colega lo retuvo:

- Tranquilo, déjelos -le dijo-. A los enamorados nada les pasa: son inmortales.
- y si logran seguir juntos después de que les pase el deslumbramiento estaremos salvados -replicó el otro-. Salvados.

Mientras reímos en el noticiero pasan imágenes de la protesta de Génova contra los capitostes de la globalización. Una de las falsas rubias contempla la noticia con la boca abierta y su cuchara detenida en el aire. Un gallito de roca, un tierno y sereno animal de la selva cercana encerrado en una enorme jaula dorada, me mira con la tristeza de esas hermosas e ingenuas muchachas que raptan los narcotraficantes y encierran en apartamentos de lujo para que les sirvan de adorno y les den hijos. Los alcaravanes que circulan bajo las mesas y entre las piernas de los comensales me recuerdan dos líneas de la carta de Rivera a Ford: «Trascendental batalla van a librar el dólar avasallador y la naturaleza omnipotente, y será vencedor el que resista mayor tiempo. La selva tropical es como la hidra mitológica; una vez derribada, hay que descabezarla de continuo porque de lo contrario resucita con mayor pujanza».

Fuentes

Sobre los eufemismos en el lenguaje del conflicto existen pistas en Alma Guillermoprieto: *U/S guerras de Colombia*, Aguilar, Bogotá, 2000. En cuanto a la cobertura periodística de la guerra pueden consultarse los trabajos de la Corporación Medios para la Paz y el artículo de María Teresa Ronderos: «Necesitamos más periodismo literario» en *Semana.com*, 5/2001. Entre los libros que se citan implícitamente al principio del aparte "Postal sobre las actuales guerras colombianas" sus lianas con la globalización», están la biografía sobre el cura Pérez (quien llegó a ser el máximo dirigente del ELN) de Joe Broderick: *El guerrillero invisible*, Intermedio, Bogotá, 2000; y la de Pablo Escobar escrita por Alonso Salazar: *La parábola de Pablo*, Planeta, Bogotá, 2001; las memorias de las ex-guerrilleras del M-19, María Eugenia Velásquez: *Escrito para no morir. Bitácora de una militancia*, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2000; y Vera Grabe: *Razones de vida*, Planeta, Bogotá, 2000; las crónicas de Alfredo Molano sobre «raspachines» y «mulas» que están recogidas en sus libros *Del llano llano*, El Ancora, Bogotá, 1996, y *Rebusque mayor*, El Ancora, Bogotá, 1998; el recuento de Ernesto Samper sobre su periodo presidencial: *Aquí estoy y aquí me quedo*, Norma, Bogotá, 2000; y la entrevista de Enrique Santos Calderón al ex-presidente Alfonso López Michelsen: *Palabras pendientes*, El Ancora, Bogotá, 2001. Para la evaluación de los trabajos históricos y la reseña sobre los procesos de la guerra me basé en Bernardo Tovar (comp.): *La historia colombiana al final del milenio*, Universidad Nacional/Tercer Mundo, Bogotá, 1997; y Luz Gabriela Arango (comp.): *La crisis sociopolítica colombiana: un análisis no coyuntural de la coyuntura*, CES / UN, Bogotá, 1998-en este libro se encuentran dos trabajos sobre el levantamiento de los raspachines en 1996, uno de Miryam Jimeno y otro de José Jairo González-; tb. utilicé el artículo de Alfredo Molano: «La parábola del retorno» en *Revista Alternatim* N° 1, 1996, Yuna conferencia suya sobre la génesis de la violencia en Colombia (Neiva, X Encuentro Nacional de Escritores, 2(01). Para sintetizar las estrategias de los narcotraficantes tuve en cuenta el libro del asesinado profesor Darío Betancour (escrito con la colaboración de M. Garda): *Contrabandistas, marimberos y mafiosos*, Tercer Mundo, Bogotá, 1994. En cuanto al debate académico sobre la guerra, me serví del texto de Daniel Pécaut: *Guerra contra la sociedad*, Espasa, Bogotá, 2001. Para caracterizar las actuales estrategias norteamericanas recurrí a la compilación de Jairo Estrada: *Plan Colombia. Ensayos críticos*, Universidad Nacional, Bogotá, 2001, allí se encuentra el artículo de Jaime Caicedo: «Una guerra social de la globalización». La cita de Antonio Caballero corresponde a su nota «El salario del crimen» en *Semana* N° 1005,6-13/8/2001. El ensayo de Fredric Jameson: «Globalización y estrategia política» en *New Left Review* 5/2000. Para una introducción al proyecto intelectual de este autor sirve consultar el libro de Perry Anderson: *Los orígenes de la posmodernidad*, Anagrama, Barcelona, 2000. El análisis de Alain Touraine sobre el desgarramiento de la subjetividad en la actualidad: *¿Podemos vivir juntos? Iguales o diferentes*, FCE, México, 1997. El plan de desarrollo referido es el del departamento del Huila para 2001-2003; el objetivo de los gremios es el del Proyecto Huila Futuro; la postura de los creadores e intelectuales está en las conclusiones del X Encuentro Nacional de

Escritores celebrado en Neiva en abril de 2001; las peticiones de los comuneros están resumidas en las páginas del proyecto Periodismo Cívico adelantado por el *Diario del Huila* y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana en Neiva, durante 2000. Los restantes datos sobre la región surcolombiana han sido tomados del Observatorio Regional de la Facultad mencionada. La carta de José Eustasio Rivera a Henry Ford se encuentra en Hilda Soledad Pachón Farías (comp.): *José Eustasio Ril'era intelectual. Textos y documentos*, Universidad Surcolombiana, Neiva, 1991. Agradezco a ella sus comentarios críticos a estas páginas.